

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-19009-2017
CARATULADO : RIVERA/RIVERA

Santiago, cuatro de Diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS:

Al folio 1, comparece don Ricardo Patricio Vega Riquelme, abogado, en representación de don Dionisio Celestino Rivera Aguilera, casado, pensionado, ambos domiciliados para estos efectos en Morande N° 322, oficina 801, Santiago e interpone demanda, en juicio ordinario de mayor cuantía, de Nulidad Absoluta por falta de consentimiento en contra de doña Edith Del Carmen Rivera Montero, casada, dueña de casa, con domicilio en Santo Domingo N° 3261, Departamento C, Santiago.

Fundamentando su demanda señala que el día 6 de noviembre del año 2010, encontrándose convaleciente de un accidente laboral y con la excusa de firmar un poder general para administrar sus bienes, su representado concurrió a la Notaria de don Héctor Bown Ortega, abogado Notario Titular de la Treinta y nueve Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Ossa N° 150, de la comuna de Ñuñoa, a la firma de una escritura pública en favor de la demandada doña Edith Del Carmen Rivera Montero.

Relata que en la oportunidad, lo que se celebró efectivamente fue un contrato de cesión de derechos en favor de la demandada, instrumento protocolizado bajo el Repertorio N° 1.233, e inscrita en el CBR de Santiago a fojas 74.328, número 111.939 del Registro de Propiedad del año 2010.

Indica que en virtud de ello, la demandada, se hizo propietaria de los derechos que le correspondían al actor como heredero y cónyuge sobreviviente de la única propiedad adquirida durante su vida.

Señala además, que aquel instrumento fue celebrado mediante la excusa de resguardar los bienes que poseía respecto de sus otros herederos y con el objeto de administrar la propiedad de manera tal que generase recursos para solventar su precaria condición personal.

Alega que su representado no sabe leer ni escribir y que sólo domina lo que se conoce como lectura de seguridad o analfabetismo funcional, indicando que esto era conocido por su hija y demandada, valiéndose de aquello y que en



ningún momento se habló de enajenar sus derechos, ni de ser despojado del uso y goce de su propiedad.

Señala que el libelante no tuvo conocimiento de tal situación hasta que, a raíz de un conflicto de violencia intrafamiliar con sus hijos tomó conocimiento de que el inmueble no era de su propiedad.

Acusa que en el referido contrato, se individualiza el bien raíz y se ceden los derechos sobre el mismo, acto seguido, en la cláusula tercera se señala que le demandante habría recibido el precio de \$3.000.00.-, cifra que, según se indica, fue pagada en cuotas con anterioridad al acto. Y alega que lo anterior es absolutamente falso, puesto que no ha recibido dineros por parte de su hija y demandada en autos.

Indica que la cláusula es contradictoria, por cuanto expresa que, en relación a la suma correspondiente al precio y su pago se utiliza la expresión: “..se pagará..”.

Señala que, a mayor abundamiento, a la fecha de la firma, el señor Rivera se encontraba en una situación de incapacidad que no le permitía comprender cabalmente lo que hacía, por cuanto estaba con un grado de discapacidad mental, producto de una severa depresión mayor, un politraumatismo con deterioro psicorgánico secundario y según los médicos con un trastorno orgánico de la personalidad; sumado a un grave conflicto de violencia intrafamiliar con su hijo mayor, lo que le generaba una situación cierta de temor e incertidumbre.

Denuncia que, la demandada de autos no desconoce que el objetivo de la escritura era distinto al que se materializó, pero que funda su negativa a modificar la escritura o devolver los derechos en que tendría mejores derechos respecto de sus hermanos para quedarse con la propiedad, reconociendo no haber efectuado pago alguno.

Finalmente realiza un análisis de los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos, señalando que en cuanto a la voluntad, esta debe ser seria y exteriorizarse, indicando que en el caso de un analfabeto, mantiene algunas características comunes con incapaces absolutos pero, al poder darse a entender claramente de forma verbal, se cumple el requisito de exterioridad de la declaración de voluntad.

Que, en el caso de marras, su declaración de voluntad nunca tuvo por objeto la cesión de derechos, respecto de la propiedad singularizada, por lo que alega la inexistencia de su voluntad en dicho contrato.



A la sazón cita los artículos 1.445 y 1.682 del Código Civil, indicando que la sanción por la omisión de algún requisito que la ley prescribe para el valor de ciertos actos, concordado con el artículo 1445, dirige a la conclusión que la inexistencia de voluntad necesariamente se sanciona con la declaración de nulidad absoluta de dicho acto.

En virtud de los fundamentos expuestos y previa cita de disposiciones legales solicita tener por interpuesta demanda de nulidad absoluta, en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, en contra de doña Edith Del Carmen Rivera Montero, ya individualizada, acogerla a tramitación, dar lugar a ella, y en definitiva declarar la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos celebrado, todo ello con expresa condena en costas.

En un otrosí de su presentación y en subsidio de no acogerse por esta magistratura la solicitud principal del libelo, interpone demanda de Nulidad Relativa por vicio del consentimiento, específicamente dolo y falta de uno de los requisitos establecidos para la validez del mismo, en este caso el pago del precio convenido, la segunda causal en subsidio de la primera, en contra de doña Edith Del Carmen Rivera Montero.

Funda su demanda en los hechos reseñados en la demanda principal y que da íntegramente por reproducidos.

Añade que el actor concurrió a celebrar el acto jurídico señalado bajo engaño y estado de necesidad, amparado en la confianza que mantenía con la demandada.

Cita el 1.445 y 1.458 del Código Civil, señalando que para que nazca un acto jurídico es necesario que el consentimiento no adolezca de vicios y se refiere al dolo como vicio del consentimiento, verificándose cuando este es obra de una de las partes y cuando aparezca claramente que sin él no se hubiera contratado.

Señala que en el caso sub-lite, se cumple a cabalidad con ambos requisitos, el engaño o maquinación fraudulenta destinada a arrancar la declaración de voluntad, es de completa autoría de la demandada, a su vez, co-contratante en la compraventa viciada. Por su parte, respecto al segundo requisito, queda de manifiesto que sin el engaño, a saber, que el contrato versaba sobre la autorización de la cesión de derechos propios y hereditarios, nunca se hubiera contratado enajenarlos.

Seguidamente y refiriéndose a la falta del pago del precio, cita el artículo 1681, que establece que es nulo el acto o contrato en que falta de uno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, según su especie y calidad, relacionándolo con el artículo 1793, que señala que la compraventa



obliga al comprador a pagar el precio, acusando que en la especie sub lite, el precio nunca ha sido pagado, más aún, llevado por el engaño se declara que el cedente declara haber recibido el precio en pagos que no se acreditaron en el momento del acto y que más aún se declara haber recibido con anterioridad a éste sosteniendo que es obligación de la cesionaria acreditar el pago respectivo.

En mérito de lo expuesto y previa cita de las disposiciones legales pertinentes solicita tener por interpuesta demanda de nulidad relativa, en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, en contra de doña Edith Del Carmen Rivera Montero, ya individualizada, acogerla a tramitación, dar lugar a ella y en definitiva declarar la nulidad relativa del contrato de cesión celebrado, ya sea respecto de una de las causales indicadas o de ambas, todo ello con expresa condena en costas.

Al folio 13, se tuvo por contestada la demanda, en rebeldía de la demandada.

Al folio 15, se tuvo por evacuado el trámite de la replica.

Al folio 17, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica en rebeldía de la parte demandada.

Al folio 25, Se efectúa la audiencia de conciliación decretada en autos, con la asistencia de don Juan Venegas Madariaga, apoderado de la parte demandante y en rebeldía de la parte demandada, llamadas las partes a conciliación, esta no se verifica por igual circunstancia.

Al folio 27, se recibió la causa a prueba.

Al folio 44, compareció doña Maritza Hervia Olave, , en representación de la demandada doña Edith Del Carmen Rivera Montero, y deduce excepción perentoria de prescripción extintiva de la acción civil incoada contra su representada.

Al efecto, reconoce la existencia del contrato de fecha 6 de noviembre de 2010, protocolizado bajo el repertorio N° 1.233, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 74.328, N° 111.939 del Registro de Propiedad del año 2010.

Cita al efecto, el artículo 2492 del Código Civil a propósito de la prescripción, indicando que el legislador a través de esta institución ha buscado dar certeza jurídica respecto de derechos y acciones toda vez que no es sano para el derecho que se perpetúen contiendas entre partes a fin de dar estabilidad jurídica.



Añade que la acción de nulidad incoada por la contraria, supera el plazo de 5 años de prescripción establecido para la misma, ya que refieren a un contrato de fecha 06 de noviembre de 2010, momento desde el cual empieza a correr dicho plazo, por lo que previa cita de las disposiciones legales pertinentes solicita declare la prescripción extintiva.

Al folio 48, el demandante despachó el traslado conferido, solicitando el rechazo de la excepción de prescripción deducida por la contraria, fundado en primer lugar, por haber sido promovida extemporáneamente, dentro del término probatorio y fundada en la sola ocurrencia del tiempo, sin señalar título en que ella consta.

Indica que funda la excepción en el trascurso de cinco años desde la firma de la cesión de derechos, alegando con ello, la prescripción ordinaria del acto, sin considerar los requisitos de prescripción extraordinaria respecto de la alegación de nulidad del acto que se deduce y cita al respecto el artículo 1683 del Código Civil, en cuanto establece: *“La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años”*.

Al folio 57, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN:

PRIMERO: Que, al folio 44, la demandada opuso, en ésta sede civil la excepción anómala de prescripción, fundando ésta en que la acción incoada supera el plazo de 5 años establecido para la misma, desde el contrato de fecha 06 de noviembre de 2010.

SEGUNDO: Que, la demandante, no evacuó el traslado dentro del plazo legal.

TERCERO: Que, en nuestro ordenamiento jurídico y para lo que interesa en estos autos, la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derecho ajenos, por no haberse ejercido durante cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales; y de conformidad a lo que ha expresado la Excma. Corte Suprema, la prescripción extintiva tiene su fundamento en el interés público de dar certeza a las relaciones jurídicas, de tal modo que un derecho subjetivo no ejercitado durante un período



prolongado crea la convicción de que aquél no existe o que ha sido abandonado.

CUARTO: Que, según dispone el artículo 2.514 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.

QUINTO: Que, para efectos del cómputo de la prescripción no sólo se exige el transcurso del tiempo, sino que deben concurrir otros requisitos, como que no se encuentre interrumpida o suspendida, según lo previsto por el artículo 2.518 del Código Civil.

En la especie, y de conformidad al mismo artículo, la prescripción se interrumpe con la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2.503 del mismo código, dentro de los cuales no se encuentra la hipótesis de marras, toda vez que la demanda fue notificada en forma legal, según consta en el folio 10, con fecha 18 de octubre de 2017, como tampoco consta en autos desistimiento alguno de la actora ni declaración de abandono del procedimiento.

SEXTO: Que se encuentra allegada al proceso copia de escritura pública de cesión de derechos de fecha 06 de Noviembre de 2010, celebrada entre Dionisio Rivera Aguilera y Edith del Carmen Rivera Montero, cuya nulidad se pretende.

SEPTIMO: Que la acción ejercida en autos es de nulidad absoluta por incapacidad del vendedor, en los términos del artículo 1682 inciso 2º del Código Civil, que establece esa sanción para los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces.

Por su parte, en el artículo 1683 de ese mismo Código, se señala que la nulidad absoluta no puede sanearse por la ratificación de las partes, *“ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años”*. Sin perjuicio de lo señalado, en el artículo 2520 del Código Civil, se indica que la prescripción que extingue las obligaciones, se suspende a favor de las personas enumeradas en los números 1º y 2º del artículo 2509, entre quienes se encuentran los “dementes”, con el límite de diez años que señala el inciso segundo de esa misma disposición.

OCTAVO: Que, en virtud de lo señalado, es evidente, conforme al mérito de los antecedentes que obran en el proceso, que la prescripción fue oportunamente interrumpida, por lo que el plazo de prescripción tenía un residuo pendiente al momento de interponerse y notificarse válidamente la demanda, lo que hace forzoso rechazar la alegación de la demandada en lo que a la demanda principal se refiere.



NOVENO: Que ahora bien, la demandada ha solicitado en forma genérica la prescripción anómala, sin especificar a qué tipo de nulidad se refería, por lo que el Tribunal ha de entender que su petición abarcaba ambas nulidades.

Y en este sentido, la nulidad relativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 1691 del Código Civil, en cuanto indica que el plazo para pedir la rescisión es de cuatro años, y en caso de error o dolo éste plazo se contabiliza desde la celebración del acto o contrato; por lo que al haberse celebrado éste, el 06 de Noviembre de 2010 y al haberse notificado a la parte demandada el 18 de octubre de 2017, es que ha pasado con creces el plazo para hacer exigible este tipo de institución, lo que lleva a acoger la excepción respecto de la demanda subsidiaria.

II) EN CUANTO AL FONDO:

EN CUANTO A LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA:

DÉCIMO: Que don Ricardo Patricio Vega Riquelme, en representación de don Dionisio Celestino Rivera Aguilera, interpone demanda, en juicio ordinario de mayor cuantía, de nulidad absoluta por falta de consentimiento en contra de doña Edith Del Carmen Rivera Montero solicitando a esta magistratura declarar la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos celebrado el día 6 de noviembre del año 2010, con expresa condena en costas, con motivo de haber sido engañado por su hija al haber firmado un contrato que se encontraba muy lejos de beneficiarlo en cuanto a sus intereses en el delicado estado de salud en que se encuentra, resultando en definitiva perjudicado al haber vendido la única propiedad adquirida durante su vida..

Funda su demanda en los hechos reseñados en la parte expositiva de este fallo, los que se dan íntegramente por reproducidos.

DÉCIMO PRIMERO: Que la demandada Edith del Carmen Rivera Montero, válidamente emplazada, permaneció en rebeldía durante la tramitación del juicio, por lo que correspondía a la actora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1698 de Código Civil, acreditar los asertos vertidos en su demanda.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, así las cosas el conflicto de la demanda principal sometido a decisión de esta sentenciadora, consiste en dilucidar si a la fecha en que el demandante celebró el contrato de cesión de derechos el día 06 de Noviembre de 2010, se encontraba en su sano juicio, como para consentir voluntariamente en un contrato de compra venta en el que cedía una propiedad que le pertenecía.



DECIMO TERCERO: Que para acreditar los basamentos de su libelo, la demandante rindió prueba documental, no objetada de contrario, Testimonial y confesional, consiste en:

Prueba documental:

1.- al anexo de folio 1, Copia autorizada de contrato de Cesión de Derechos, entre don Dionisio Celestino Rivera Aguilera, en calidad de cedente, y doña Edith del Carmen Rivera Montero, como cesionaria, celebrado ante Notario Público sr. Héctor Bown Ortega, titular de la Treinta y Nueve Notaría de Santiago, de fecha 6 de noviembre de 2010. Repertoriado bajo el N° 1233. En cuya cláusula primera se señala a: Danilo Andrés; Rosa Ana; Edith del Carmen; Marisa Haydee y Dionisio Alejandro Rivera Montero y a don Dionisio Celestino Rivera Aguilera como dueños de la propiedad ubicada en calle Pasaje Cuatro N° 1.753, que corresponde al lote N° 21 de la manzana 15 del plano de Loteo de la Población “El Estanque”, sector 1, comuna de Peñalolén, a continuación se describen sus deslindes. Del instrumento se visualiza que don Dionisio Celestino Rivera Aguilera, vende, cede y transfiere a doña Edith del Carmen Rivera Montero la totalidad de sus derechos, parte o cuota proindiviso que le corresponde sobre el inmueble sublite. En su cláusula tercera se establece como precio de la cesión, la suma de \$3.000.000.- que la cesionaria pague en diversas cuotas con anterioridad al negocio jurídico in comento y que el vendedor declaró haber recibido a su entera conformidad. Figuran al colofón del instrumento huella y firma de ambos contratantes.

2. Copia de Inscripción de fojas 74.328 N° 111.939, correspondiente al Registro de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, emitido con fecha 21 de marzo de 2017, en que consta la cesión de derechos verificada entre don Dionisio Celestino Rivera Aguilera a doña Edith del Carmen Rivera Montero, respecto de la propiedad ubicada en calle Pasaje Cuatro N° 1.753, que corresponde al lote N° 21 de la manzana 15 del plano de Loteo de la Población “El Estanque”, sector 1, comuna de Peñalolén. Lo que fue adquirido por cesión de derechos entre los mencionados de fecha 6 de noviembre del año 2010, por el precio de \$3.000.000.-, Rol de avalúo N° 9.338-9.

3. Al folio 35, Copia de Resolución de la Comisión de Evaluación de Incapacidad por Accidente del Trabajo, de la Mutual de Seguridad. Resolución N° 2008-1141, de 23 de octubre de 2008, en donde se establece el 75% de incapacidad y se otorga pensión por invalidez a don Dionisio Rivera Aguilera.



4. Al folio 44, se incorpora oficio N°6782 de 27 de agosto de 2018, emitido por la Gerencia Corporativa de asuntos legales de la Mutual de Seguridad. Guardado bajo custodia de este Tribunal N° 7.482-2018. Se adjuntan al oficio:

4.1.- Ficha Clínica y Resolución N° B101/20080546 de la Comisión Médica de Reclamos, correspondiente a don Dionisio Celestino Rivera Aguilera por evaluación de data 31 de enero de 2008. Señalando como diagnóstico una contusión frontotemporal izquierda y heridas faciales; traumatismo abdominal complicado con lesión de hígado; contusión de hombro derecho con rotura del tendón supraespinoso. Traumatismo abdominal con compromiso hepático y esplénico. Fracturas de fémur; expuesta de rótula y de tercio distal de la pierna derecha; secuelas en extremidad inferior derecha; algia residual rodilla y tobillo con movilidad completa de cadera, rodilla y tobillo (10%); Extremidad superior derecha: Algia residual de hombro con movilidad completa (5%). Respecto a la revisión de incapacidad por resolución CEIAT N° 923 del 6 de noviembre de 2003 corresponde al 70%. Descarta patología mental secular. Con una incapacidad del 15%, siendo apelada la calificación anterior, se resuelve con fecha 23 de junio de 2008, Res. N°20080546, que en mérito de los antecedentes, concluye, como consecuencias de Salud Mental: Depresión mayor 2° a politraumatismo, deterioro psicoorgánico; Trastorno orgánico de la personalidad; incapacidad de salud mental de 60%; incapacidad por limitación funcional extremidad inferior derecha de 12% e; Incapacidad por limitación funcional hombro derecho de 3.5%; Ascendiendo a una incapacidad total de 75.5%. Informe clínico firmado por la Dra. Nilsa Pizarro V., Presidenta de COMERE y autorizado por la Sra. Mónica Leighton R., Ministro de fe del mismo servicio.

4.2.- Oficio N° 39.771 de la Superintendencia de seguridad social de fecha 18 de agosto de 2009, que declara que no procede hacer lugar a solicitud de reconsideración interpuesta por don Dionisio Celestino Rivera Aguilera, de fecha 9 de julio de 2009, concluyendo que el Departamento Médico del servicio en revisión de los antecedentes, determina que no existen nuevos antecedentes que permitan modificar lo previamente resuelto. Indica que a la fecha posee un 15% de discapacidad permanente atribuible a las secuelas de las lesiones sufridas; en cuanto a la afección psiquiátrica se estima de origen común, por cuanto reconoce como génesis factores psicosociales y personales, no vinculados con el accidente sufrido; asimismo, determina que no existen secuelas dermatológicas ni hepáticas vinculadas con el



accidente. Firmado por el Sr. Álvaro Elizalde Soto, Superintendente, Superintendencia de Seguridad Social.

Prueba testimonial:

Al folio 33, comparecen doña María Teresa del Carmen Abarca Soto y doña Edita del Carmen Montecino Abarca, quienes legalmente juramentadas, libre de tachas, e interrogadas al tenor del auto de prueba, exponen:

Al punto 1 de la resolución que recibe la causa a prueba, esto es, existencia del contrato de cesión de derechos entre las partes. En caso afirmativo, términos y condiciones del mismo. Ambas testigos reconocen la existencia de un acto jurídico entre las partes de este juicio, señalando que en realidad la intención del señor Rivera era otorgar un mandato especial, y de carácter temporal, para la administración de la propiedad donde actualmente reside, ubicada en la comuna de Peñalolén, pero que, atendido que el demandante no sabe leer ni escribir, y que se encontraba en un estado delicado de salud producto de un accidente, motivos por los cuales finalmente celebró una cesión de derechos. Repreguntadas por la discapacidad de don Dionisio Rivera y por su disminuido nivel de alfabetismo, se encuentran contestes en señalar, que la primera corresponde a un 75%, diagnóstico realizado por el servicio Mutual de Seguridad, en cuanto a que no sabe leer y escribir, señalan constarle tal situación porque es doña Carmen Montecino quien lee su correo y diligencia sus trámites hace más de 2 décadas.

Al punto de prueba, esto es, en el caso de existir el contrato, si adolece de algún vicio del consentimiento que afecte su validez. Ambas testigos deponen, que efectivamente existe un vicio en la voluntad, derivado de la condición de analfabeto del demandante de autos.

Al punto 3 del auto de prueba, en cuanto a si en la celebración del contrato de cesión de derechos la demandada obró con dolo. Hechos y circunstancias. Ambas declaran que la demandada obró con dolo, puesto que siendo su hija debiese conocer la condición de su padre, en cuanto a su discapacidad y nivel de alfabetismo.

Al cuarto punto de prueba, preguntadas sobre si la demandada pagó al actor el precio pactado en el contrato de que se trata, ambas acusan que no pagó el precio pactado, antes ni después de celebrado el contrato, la segunda testigo agrega que el demandante sólo vive de su pensión, siendo los únicos ingresos que percibe.

Prueba confesional:



Al folio 58, la demandada, doña Edith del Carmen Rivera Montero, depuso al tenor del pliego de posiciones:

Declara que es efectivo que suscribió junto a su padre, el demandante en esta causa, una escritura en la Notaría de don Héctor Bown Ortega, abogado Notario Titular de la Treinta y nueve Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Ossa N° 150, de la comuna de Ñuñoa, a su favor; Que no es efectivo que cuando dicha escritura se tramitó su padre se encontraba enfermo, pero que sí se encontraba convaleciente por su accidente; Que no es efectivo que el objeto de dicha escritura era darle un poder general de administración de bienes; Que no es efectivo que dicha escritura tuviera como objeto proteger los bienes que el demandante tenía, en especial la propiedad ubicada en Pasaje Cuatro n° 1653, de la Población El Estanque, comuna de Peñalolen; Que es efectivo que don Dionisio Rivera, no sabe leer y escribir y que sólo firma con lo que él cree son sus iniciales; Que es efectivo haber realizado pago del precio por los derechos cedidos que en el contrato se indican; Que pagó en cuotas con dinero proveniente de su trabajo; Que no sabe por qué en la cláusula tercera del instrumento, se señala que se “pagará” y luego se indica que se pagó en diversas cuotas con anterioridad a este acto; Que, en relación a la pregunta sobre si el demandante nunca ha dejado el bien inmueble materia de dicho contrato, señala que es así porque ella lo ha dejado vivir ahí; Preguntada para que diga si es efectivo que don Dionisio Rivera, pensaba que estaba suscribiendo una escritura de administración de bienes, señala que no es efectivo, que sabía perfectamente lo que hacía, que lo hizo sólo y después fue a su casa para firmar; Señala que no es efectivo que uno de los motivos por los cuales convenció a su padre de la firma de la escritura, era por los problemas graves que tenía con el resto de sus hijos; Indica que es efectivo que su padre tenía problemas de violencia intrafamiliar con sus hijos, y que ella era la única que lo defendía, pero que emocionalmente él se encontraba bien; Que no es efectivo que a la época de la celebración de dicho acto, don Dionisio Rivera se encontraba sufriendo una severa depresión mayor y que estaba con licencia médica; Que no es efectivo que en la oportunidad en que se firmó la escritura fue ella quien le explico su contenido y leyó las partes que consideró más importantes de dicha escritura, sino que en la misma Notaría le explicaron todo sobre el contrato; reconoce que es efectivo que no informó al señor Notario que don Dionisio Rivera era analfabeto disfuncional, pero que en la Notaría lo ayudaron; Responde que efectivamente don Dionisio Rivera tiene una incapacidad de un 75.5 %, pero que esta es física, no mental.

DÉCIMO CUARTO: Que nuestra jurisprudencia exige para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, que consienta en dicho acto y **que su consentimiento no adolezca de vicios.**



DÉCIMO QUINTO: Que por otro lado el artículo 1446 del Código Civil, dispone que toda persona legalmente capaz, excepto aquellos que la ley declare incapaces; no produciendo los actos de los absolutamente incapaces, siquiera obligación natural (1447 del mismo Código).

Al respecto, cabe citar en este contexto, el artículo 465 del Código Civil, que dispone que *“Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente.”*.

DÉCIMO SEXTO Que de esta forma, de acuerdo a la prueba allegada al Tribunal, especialmente de las resoluciones dictadas por la Mutual de Seguridad, se encuentra acreditado que el actor producto del accidente sufrido, fue declarado con una incapacidad total del 75,5%, no obstante de ella sólo el 60% corresponde a una incapacidad mental, consistente en *“Depresión mayor secundaria a politraumatismo, deterioro sicorgánico secuntadio a TEC y trastorno orgánico de la personalidad”*.

DÉCIMO SEPTIMO: Que el Código Civil chileno, no define la demencia o enajenación mental; por lo que la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, supliendo esta omisión, se ha referido a la demencia como a la *“Situación en que se encuentra un individuo que, por alteración de sus facultades mentales, carece de la aptitud necesaria para dirigir su persona o administrar su patrimonio”* (Corte de Apelaciones de Concepción, Gaceta de los Tribunales, Tomo 11, página 613)

DÉCIMO OCTAVO Que la prueba de la demencia, es un acto muy difícil de probar directamente y en la generalidad de los casos, ella resultará de presunciones graves, precisas y concordantes, que hará el juez en razón de la vista de los hechos que acredite el demandante, y para ello deberá probar que el estado de demencia era habitual a la época de la ejecución o celebración del acto o contrato.

DÉCIMO NOVENO: Que de la prueba rendida y pormenorizada precedentemente, no pueden establecerse las presunciones graves precisas y concordantes requeridas para tener por acreditado el hecho que alega el actor, en cuanto a su estado mental, toda vez que el único antecedente resulta ser la resolución de la Mutual de Seguridad que establece la incapacidad mental en un 60%, sin embargo, no se encuentra avalado por otra prueba suficiente e idónea que permitan a esta sentenciadora adquirir la convicción que a la época de celebrar el contrato presentaba fallas de memorias o falta de capacidad



ejecutiva de su juicio o que evidenciaba un desmejoramiento extremo de sus facultades cognitivas ni mucho menos autovalerse de las actividades básicas de comunicación con su entorno.

En efecto, la prueba testimonial rendida, no aporta en forma alguna antecedentes que permitan complementar los presupuestos fácticos invocados; limitándose a señalar que el actor tiene una invalidez mental del 75%, lo que tampoco resulta ser efectivo.

VIGÉSIMO: Que a mayor abundamiento, es necesario mencionar que el libelante, quien pretende alegar un estado de discapacidad mental de tal magnitud que no le permitía entender lo que hacía; sin embargo, no ha tenido el mismo reparo al entender y ejercer su acción como en el caso sublite y entregar su representación a un abogado a quien le confirió mandato por escritura pública; es decir ejecutó un acto jurídico.

Que así las cosas, no es posible a esta Juez, arribar al convencimiento fehaciente que don Dionisio Rivera Aguilera, se encontrara privado de razón al momento de celebrar el contrato.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que por otro lado, la alegación de no saber leer ni escribir, no resulta suficiente, toda vez que según aparece de la confesional de la demandada, manifestó que se le había explicado todo en la Notaría, ya que éstos Ministros de Fe, son expertos en derecho y al terminar de redactar la escritura y antes de su firma leen el contrato a las partes quienes ratifican su contenido, lo que consta de la misma escritura de cesión de derechos; por lo que no resulta relevante que no sepa leer ni escribir, y ello no constituye demencia.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que entonces, de acuerdo a lo prescrito en el inciso 2° del artículo 465 del Código Civil, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción son válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba demente; lo que no ha ocurrido en la especie, llamando especialmente la atención de esta sentenciadora que hasta la fecha no exista o no se ha acreditado en autos que haya una petición de interdicción respecto del demandante.

VIGÉSIMO TERCERO: Que por todas las consideraciones antes dichas, no será posible otorgar la tutela solicitada, negándose lugar a la demanda.

VIGÉSIMO CUARTO: Que en relación a la demanda subsidiaria de nulidad relativa, atendido lo resuelto en relación a la excepción alegada, se omite pronunciamiento.



Y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 465, 1437, 1446, 1447, 1489, 1545, 1546, 1681 y siguientes, 1691, 1698, 1901 y siguientes del Código Civil; 144, 160, 170, 341, 342, 346, y siguientes, 384 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas pertinentes, SE DECLARA:

I. Que se acoge la excepción de prescripción deducida por la demandada, sólo respecto de la demanda subsidiaria de nulidad relativa, rechazándose en cuanto a la nulidad absoluta.

II. Que se rechaza la demanda principal de nulidad absoluta del contrato deducida por don Dionisio Rivera Aguilera, en contra de doña Edith del Carmen Rivera Montero, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol: 19.009-2017.-

DICTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cuatro de Diciembre de dos mil dieciocho .-**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>